

El ajuste universitario como política de Estado

La última semana se realizó una nueva Marcha Federal Universitaria, la cuarta en poco más de dos años. La movilización volvió a mostrar que la universidad pública conserva un respaldo social importante. Pero también dejó en evidencia una limitación persistente del debate argentino: cada vez que aparece el tema universitario, la discusión queda atrapada en una falsa opción.

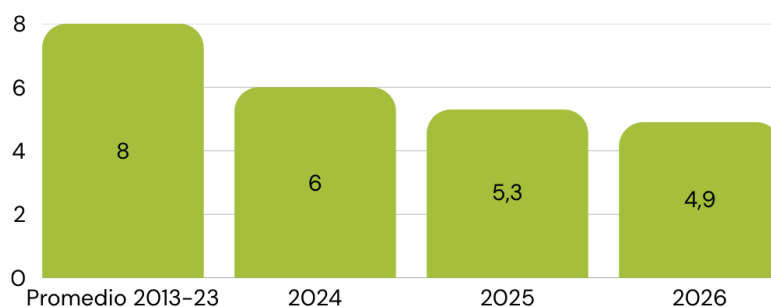
De un lado, el oficialismo tiende a presentar a las universidades como espacios opacos por su politización y resistentes a cualquier rendición de cuentas. Del otro, buena parte del sistema universitario responde como si cualquier pedido de transparencia o reforma fuera un ataque a la educación pública. Así, la conversación queda encerrada entre dos posiciones cómodas: para unos, las universidades están politizadas; para otros, el único problema es que falta presupuesto.

Los datos muestran algo más incómodo. Los gobiernos anteriores expandieron el sistema creando universidades sin planificación ni financiamiento proporcional. El gobierno actual pisó el presupuesto sin reformar las reglas de fondo. Un sistema que expande instituciones sin planificación, distribuye recursos por inercia y no evalúa resultados va a seguir deteriorándose con o sin más presupuesto.

Los números del ajuste

El Gobierno mantiene una fuerte restricción presupuestaria sobre las universidades. Para 2026, el presupuesto para educación superior es de \$4,9 billones. Este es un monto 20% superior en términos nominales al presupuesto ejecutado en el 2025. Dado que la inflación promedio anual para el 2026 se estima en el orden del 30%, en términos reales, el presupuesto de universidades será un 7% inferior al del 2025, un 20% inferior al del 2024 y un 40% inferior al promedio histórico 2013 – 2023.

Gráfico 1: Gasto universitario real 2017–2026, en billones de pesos de enero 2026



Nota: Billones de pesos a precios de 2026. 2026: proyección en base a ejecución enero-abril. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Fuente: Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía de la Nación.

El problema no empezó con la motosierra

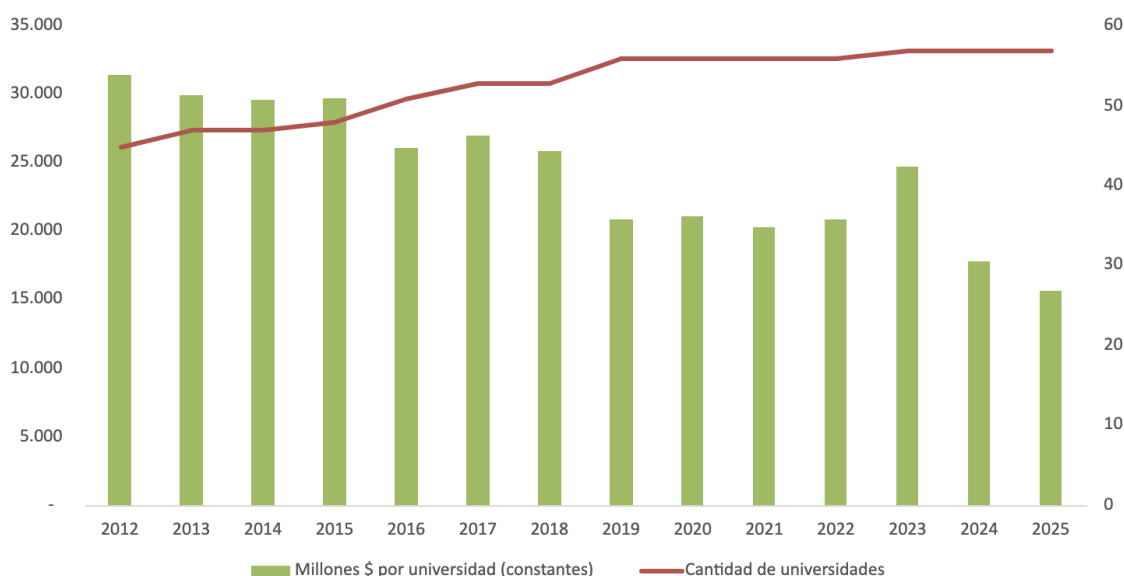
Reconocer la magnitud del ajuste actual no implica ignorar los problemas estructurales que el sistema arrastra desde hace años. También hubo decisiones previas que deterioraron la gestión y redujeron la capacidad de cada peso invertido.

El dato más ilustrativo es que el sistema se expandió mientras se achicaban los recursos promedio por institución. En 2012, cada universidad recibía en promedio \$31.446 millones a precios constantes. Ese monto cayó de forma casi ininterrumpida hasta llegar a \$20.286 millones en 2021, una reducción del 35%. En 2023 hubo una recuperación parcial hasta \$24.786 millones, pero sin revertir la tendencia. Para 2025, la estimación ubica ese número en \$15.636 millones, el nivel más bajo de toda la serie.

Al mismo tiempo, la cantidad de universidades nacionales pasó de 45 en 2012 a 57 en la actualidad —incluyendo las cinco aprobadas por ley en 2023 aunque aún no operativas—, lo que implica la creación de al menos doce nuevas instituciones en ese período. Entre ellas figuran las aprobadas en 2014 y 2015 (Hurlingham, Rafaela, Guillermo Brown, Scalabrini Ortiz, entre otras) y las sancionadas en 2023 (Río Tercero, Pilar, Delta, Ezeiza), varias sin evaluación previa de demanda, oferta existente o financiamiento disponible.

Lo notable es que esta tendencia se sostuvo a lo largo de más de una década y de distintas administraciones. La expansión de instituciones sin financiamiento proporcional no fue un error puntual sino una práctica recurrente: crear universidades tiene rédito político inmediato; financiarlas adecuadamente es un compromiso de largo plazo que ninguna administración priorizó.

Gráfico 2: Gasto promedio por universidad 2012–2023, en pesos constantes



Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Capital Humano de la Nación y Secretaría de Hacienda. Millones de pesos constantes por universidad nacional (base IPC = 100 en 2012). 2024–2025: estimación en base a la variación del gasto real total (Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía) anclada en el dato de 2023. A partir de 2024 el gobierno frenó la apertura de nuevas universidades; la cantidad se mantiene en 57.

Crear universidades tal vez puede ser una herramienta valiosa para federalizar la oferta educativa y acercar estudios superiores a jóvenes que de otro modo no podrían acceder. Pero expandir el sistema sin financiamiento suficiente y sin evaluación de resultados no es una política de inclusión: es una forma de diluir recursos escasos entre más instituciones con menos capacidad para funcionar bien.

El mecanismo de asignación tampoco ayuda. El presupuesto universitario se distribuye en gran medida por inercia: cada institución parte de lo que recibió el año anterior y negocia incrementos en función del crecimiento global del gasto. No hay una fórmula clara, pública y estable que combine matrícula, tasas de graduación, necesidades territoriales, producción científica, inserción laboral de los egresados y cobertura de sectores vulnerables. Sin esos criterios, más presupuesto no necesariamente llega donde más se necesita ni premia a las instituciones que mejor cumplen su función.

A eso se suma un dato que el propio sistema tiene dificultades para discutir: solo el 23% de los graduados completa sus estudios en el tiempo teórico previsto¹. La desigualdad no está solo en la puerta de entrada: los estudiantes del decil más pobre representan el 7,9% de la matrícula en primer año, pero apenas el 1,1% en quinto año². La gratuidad es una condición importante, pero no suficiente.

¹ Síntesis de Información Estadística Universitaria de la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU), Ministerio de Capital Humano.

² Templado, I., Catri, G., Nistal, M. y Volman, V. (2022). *Desigualdad educativa en el nivel superior*. Observatorio Argentinos por la Educación

La anatomía del ajuste: dónde cayó

El ajuste no fue neutral dentro del presupuesto universitario. Más del 84% del gasto se destina a salarios docentes, no docentes y de autoridades. El resto cubre funcionamiento —luz, gas, limpieza, mantenimiento— más ciencia, hospitales universitarios y becas. A eso se suma una debilidad estructural que los números del presupuesto apenas capturan: la inversión en tecnología es marginal dentro del gasto universitario, lo que limita la capacidad de las instituciones para modernizar sus procesos, ampliar la oferta virtual y mejorar la experiencia de los estudiantes. Esa composición rígida determina cómo se distribuye el golpe cuando los recursos se reducen.

El análisis de la ejecución del primer cuatrimestre de 2026 muestra que el impacto fue desigual según la partida. Los salarios cayeron 26,8% en términos reales respecto del mismo período de 2023. El funcionamiento cayó 40,5%. Las partidas de ciencia, hospitales universitarios y becas acumularon una caída de 77,9%. El resultado es un sistema que perdió en todas sus partidas pero perdió capacidad operativa de forma más pronunciada, con crecientes dificultades para garantizar condiciones mínimas de cursado, investigación e infraestructura. Se gastó menos, pero no mejor. La distribución interna del recorte no refleja una lógica de reforma, sino una reducción desordenada de recursos.

Gráfico 3: Caída por partida 2023 vs. 2026



Fuente: elaboración propia en base a Quiroga, R. (2026), github.com/rquiroga7/presupuesto_Universitario. Variación real del gasto devengado, primer cuatrimestre 2026 vs primer cuatrimestre 2023. Deflactado por IPC-INDEC y REM-BCRA, a precios de enero de 2026.

¿Cuál es la salida?

El presupuesto universitario cayó de forma significativa en los últimos dos años y eso impacta sobre el funcionamiento del sistema. Reconocerlo no implica que más financiamiento sea suficiente por sí solo. El problema de fondo es de gestión: cómo se asignan los recursos, con qué criterios se crean instituciones y qué resultados se exigen a cambio del financiamiento público.

Una reforma seria requiere atacar los dos planos a la vez. En el plano del financiamiento, recuperar niveles razonables de gasto real es una condición para que el sistema pueda operar. Pero sin cambios en las reglas de asignación, más presupuesto va a reproducir los mismos problemas: recursos distribuidos por inercia, instituciones creadas sin planificación y resultados que nadie evalúa sistemáticamente.

El segundo plano es el más postergado. El financiamiento universitario tiene que incorporar criterios más claros: matrícula, permanencia, graduación, producción científica, función territorial y cobertura efectiva de los sectores de menores ingresos. Eso requiere más información pública y comparable. No alcanza con saber cuánto recibe cada universidad: también hay que saber qué resultados obtiene y qué brechas arrastra.

La transparencia no debería ser vista como una amenaza a la autonomía universitaria sino como una condición para fortalecerla. Y la discusión sobre gestión no debería quedar reservada para los momentos de ajuste: es una conversación que el sistema le debe a la sociedad independientemente de cuánto dinero haya disponible.

La universidad pública no necesita una defensa nostálgica ni un ataque ideológico. Necesita una política seria: reglas más modernas, criterios de asignación más claros y mecanismos de evaluación que permitan saber qué funciona y qué no.